

Talca, veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que en la presente causa Rit O-1-2020 del Juzgado de Letras de Molina, por sentencia de 18 de noviembre de 2022, se acogió la demanda de despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones y se ordenó el pago de aquellas que la misma decisión indica.

Segundo: Que la demandada dedujo recurso de nulidad en contra del fallo, por las causales siguientes, planteadas una en subsidio de la otra:

a). La del artículo 478 letra a) del Código del Trabajo. Luego de señalar las fechas de las actuaciones del juicio, refiere que la causa quedó para sentencia el 27 de enero de 2022, la que fue cambiada para el 7 de febrero y luego para el 21 del mismo mes y año. A continuación se fijó como fecha del fallo el 10 de mayo, acto seguido el 10 de junio y luego el 25 de agosto; finalmente –todo en base a sus peticiones- quedó para el 18 de noviembre de 2022, fecha en la cual se dictó.

Agrega que la sentencia fue dictada por una jueza que, a ese momento, ya no era jueza, pues intervino en la causa como suplente y había dejado el cargo. Considera que concurre, por tanto, la causal de nulidad de haber sido pronunciada por juez incompetente.

Solicita que se invalide el fallo y la audiencia de juicio para que ésta se celebre nuevamente, por juez competente.

b). La del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo. Expresa que el fallo incurre en imprecisiones en lo relativo a la naturaleza y tiempo de la labor prestada por el actor.

Los yerros son: 1. Da por acreditada la fecha del término de la relación por el apercibimiento decretado y luego busca justificarlo en los medios probatorios. 2. No se hace cargo de los medios probatorios aportados por su parte para desvirtuar dicho punto, y otorga valor desproporcionado a un testigo de la demandante, contra su testigo que afirmó que ya en octubre el actor no trabajaba en la empresa y el de la testigo que dijo que el pago de imposiciones de noviembre fue por un error. 3. Acerca de lo expuesto, la decisión no se hace cargo para descartar sus probanzas.

“En general – concluye la exposición de esta causa- el análisis ejecutado por la sentenciadora carece y atenta de toda lógica, enfocando el mismo solo a los medios probatorios aportados por la demandante, quitando valor a la prueba rendida por esta parte sin lógica alguna, y otorgando un valor probatorio desproporcionada a testigos de la denunciante a pesar de incongruencias de aquellas en la declaraciones, reconocimiento por parte del Sr., Cifuentes en cuanto a la época en la cual el Sr., Pavez efectivamente dejó de trabajar en la empresa demandada, y la correlación con los documentos presentados.”

El libelo, en cuanto a las peticiones en lo concerniente a esta segunda causal, se limita a decir: *“El acogimiento de dicha causal, importa que S.S. Ilustrísima, deberá dictar sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley.”*, sin especificar cuál es esa sentencia correspondiente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XTGXXKBWXXT

c). La del artículo 478 letra d) del Código del Trabajo. Manifiesta que se vulneró el principio de la inmediación, porque la causa se inició el 7 de enero de 2020, el proceso fue sumamente accidental, con nulidad de audiencias y reagendamientos y la sentencia definitiva se dictó con 10 meses de diferencia. Así, transcurrieron dos años y 10 meses, lo que atenta en contra de dicho principio. Existió una dilación exagerada e injustificada por parte del tribunal a quo lo que afecta el razonamiento y apreciación de la prueba ofrecida en marzo de 2020 e incorporada desde el 18 de enero de 2022, más el daño patrimonial por el retardo por el aumento de las indemnizaciones en cerca de diez millones de pesos. Puede hablarse, incluso, de responsabilidad del Estado.

Como consecuencia de la nulidad que pide, solicita *“que ordene se retrotraiga la causa a la etapa procesal de iniciar nuevamente la audiencia de juicio, dirigida por el tribunal correspondiente.”*

Tercero: Que la sentencia definitiva fue pronunciada por la jueza que intervino en la audiencia de juicio y aunque aquello ocurrió después que había dejado de desempeñar la suplencia en virtud de la cual actuó en el juicio, tal circunstancia no le impide dictar sentencia, ya que ella quedó responsable de hacerlo ante un plazo que no es fatal y vinculada al proceso en el momento en el que dirigió la audiencia de juicio, de modo que no concurre ninguna de la hipótesis de la letra a) del artículo 478 del Código del Trabajo para tener por configurada la primera causal esgrimida por la demandada.

Con todo, lo sucedido no parece ser una situación habitual en los tribunales de la zona.

Cuarto: Que el examen de la segunda causal demuestra que controvierte la valoración de la prueba en lugar de explicitar cómo se vulneran las reglas de la sana crítica, de qué manera la infracción influye en lo decisorio, qué debe resolverse en su lugar y con ello omite señalar la petición concreta sobre el particular, de modo que no es posible admitir lo impetrado al respecto.

Quinto: Que la conculcación del principio de inmediación se asienta, en el arbitrio de invalidación, en la tardanza que se produjo en la dictación de la sentencia. Sin embargo, no se discute que fue fallada por la jueza que estuvo en el juicio en el cual estuvo frente a las partes y a las pruebas, percibiendo todo de manera personal, por lo que tal vicio tampoco concurre.

Como se dijo a propósito de la primera causal, aquello no parece ser una situación habitual en los juzgados de la Región.

Sexto: Que, justamente, en razón de lo percibido y para los fines disciplinarios a que pudiere haber lugar, se dispondrá pasar los antecedentes al Tribunal Pleno.

Y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 474, 477, 478, 479, 480, 481 y 482 del Código del Trabajo y 146 del Código de Procedimiento Civil, **SE RECHAZA** el presente recurso de nulidad, por lo que la sentencia de 18 de noviembre de 2022 no es nula.



Acordada, en lo relativo a la tercera causal de invalidación, con el voto en contra del abogado integrante don Diego Palomo Vélez, quien estuvo por acoger el recurso por ese motivo, a la luz de lo prescrito en el artículo 478 letra d): “Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial expresamente”, desde donde debe extraerse en primer lugar, que en este precepto pone de relieve la importancia y el carácter de esencial que el legislador le da a la inmediación judicial en el proceso laboral, lo que no hace más que ser una manifestación del establecimiento de la inmediación como un principio rector. En efecto, el inciso primero del artículo 425 dispone: “Los procedimientos del trabajo serán orales, públicos y concentrados. Primarán en ellos los principios de la inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad.”

Pues bien, para el adecuado entendimiento de la eventual configuración de la causal por violación de las disposiciones sobre inmediación debemos entender de qué hablamos al mencionar inmediación. En ese sentido la inmediación es una condición para la verdadera eficacia de las reformas hacia los procedimientos predominantemente orales, pues carecería de sentido el diseño formal de un procedimiento oral que no asegure la presencia del juez y el contacto directo e inmediato de este con las personas cuyas declaraciones tiene que valorar durante el debate y la incorporación de (todas) las pruebas. Considerando aquello es la relación directa que deberá tener el juez con las partes y con la prueba rendida (inmediación en sentido lato), que le permitirá formar y acceder a la intelección inmediata y no referencial de lo obrado.

Además, una parte esencial de la inmediación es que quien dicte la sentencia debe ser el mismo juez que presenció la práctica de la prueba, y así lo exige el legislador (inmediación en sentido estricto). Así queda refrendado del artículo 460: “Si el juez que presidió la audiencia de juicio no pudiere dictar sentencia, aquélla deberá celebrarse nuevamente.”

Por fin, el establecimiento de la inmediación como pilar del proceso laboral reformado (pilar al cual se alude en un importantísimo porcentaje de las sentencias de Cortes que fallan recursos de nulidad laboral) conlleva la prohibición de la delegación de funciones, cuestión que en los procedimientos es de lo más común, como acontece en el actual procedimiento civil. Es tal la importancia de la inmediación que en el precepto recién transcrito y en el que sucede a este párrafo el legislador es tajante en el sentido de que la falta de inmediación tiene como consecuencia inevitable la nulidad.

En el caso de marras, el transcurso de una pluralidad de meses para la dictación de la sentencia (por las razones que sean), obligaban, a juicio del suscrito, a acoger el recurso, si no se quiere consolidar la idea (a nuestro juicio mala idea) que resulta válido recurrir a apuntes, grabaciones u otros medios de ayuda memoria para sentenciar después de un largo tiempo de



verificadas las pruebas. A juicio de este disidente, y en coherencia con la relevancia que la ley y reforzadamente las Cortes han dado a este principio-pilar-regla cada vez que resuelven recursos de nulidad por la causal del 478 letra d), debió prosperar el presente arbitrio por la tercera causal intentada por el recurrente. Ir en camino contrario, es relativizar la importancia que la reforma ha dado al enjuiciamiento del primer grado y la determinación del juicio de hecho en esa sede.

No se condena en costas del recurso por haber obtenido un voto la parte vencida.

Atendido el tiempo transcurrido desde que la causa quedó en estado de fallarse por el tribunal de base y la fecha en la que se expidió el fallo en revisión, **pase copia de los autos al Tribunal Pleno, para los fines consiguientes.**

Redacción del ministro don Hernán González García, salvo el voto de minoría, redactado por su autor.

Regístrese y en su oportunidad devuélvase.

Rol N° 17-2023/Laboral Cobranza.

Se deja constancia que no firma la Ministra doña Marisol Ponce Toloza, por encontrarse haciendo uso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XTGXXKBWXT

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Hernán González G. y Abogado Integrante Diego Ivan Palomo V. Talca, veintinueve de diciembre de dos mil veintitres.

En Talca, a veintinueve de diciembre de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XTGXXKBWXT